

Editorial



Arturo Trinelli

El tercer número de *Punto Seguido-Revista de Gestión Gubernamental* nos encuentra en un contexto de definitiva pospandemia pero en condiciones económicas y sociales aún más deterioradas que en la etapa anterior. El escenario previo de recesión estructural y endeudamiento empeoró todos los indicadores. La pobreza y la indigencia se incrementaron, la inflación recortó el poder adquisitivo de los ingresos y las desigualdades preexistentes (y multidimensionales) crecieron y dispararon el conflicto social. Una marca del último lustro sí parece inalterable: sociedades más organizadas y con conciencia de derechos serán menos tolerantes a los intentos de ajuste, sea del gobierno que sea. La política, por lo tanto, deberá saber leer esta nueva realidad de los pueblos empoderados que, desde temas económicos, pasando por el reconocimiento de identidades o el resguardo por el medio ambiente, parecen dispuestos a resistir. 40 años de democracia nos impone recordar las conquistas, pero también trabajar por todo lo pendiente para neutralizar posiciones extremas y antisistema que la ponen en riesgo.

Esta nueva dinámica de las relaciones Estado-sociedad civil exige repensar la calidad de las intervenciones públicas, especialmente en un año electoral. Es desde esa preocupación que encaramos esta tercera edición, buscando ejemplos concretos de algunas de las políticas públicas más representativas de estos años con impacto en sectores de indudable protagonismo en lo que, esperemos, sea la pronta recomposición del tejido social y productivo de nuestro país.

Así, presentamos artículos que, como siempre, procuran aportar algunas certezas y despertar otros tantos interrogantes para futuros aportes o intercambios. Un eje vertebrador que los agrupa, y que

nos interesa remarcar, es cómo desde cada caso puede registrarse una cosmovisión subyacente sobre el Estado, sus alcances, limitaciones y tensiones de funcionamiento, que muchas veces explican marcas y contramarchas, avances y retrocesos. Pues, en efecto, conviene insistir, incluso desde posturas pro estatales, en las incertidumbres que muchas veces se le presentan a los “hacedores de política”, atravesados siempre por la tensión entre centralidad y subsidiariedad estatal; los hechos fortuitos del contexto (una pandemia, una guerra, una sequía); las limitaciones del propio Estado para operar en situaciones límite sin datos confiables (o directamente sin datos); las disidencias dentro de la propia gestión en las prioridades a encarar; los condicionamientos del entorno; los intereses (muchas veces contrapuestos y hasta contradictorios) entre niveles de gobierno, etc. “Desromantizar” la gestión en el Estado no significa otra cosa que valorizarla y evitar reduccionismos puede permitirnos ahondar mejor en las complejidades que supone hacer política pública. Y hasta exigir como ciudadanos/as explicaciones más sofisticadas que resolver el problema de la inflación en 5 minutos o creer que bajando la dotación de empleados públicos se tienen más recursos para construir hospitales.

Joaquín Baliña estudia una de las políticas más emblemáticas de la pandemia, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que supuso no solamente un desembolso importante de recursos sino una sofisticada coordinación institucional entre diferentes organismos del Estado para llegar en tiempo y forma a los sectores más afectados por la cuarentena y el súbito confinamiento que la emergencia sanitaria decretó. No es propósito del autor discutir la suficiencia de los montos ni las velocidades de respuesta, sino procurar enfocar la iniciativa en lo que sería una persistencia de típicas políticas asistenciales en desmedro de una “innovación” en materia de políticas sociales. Haciendo una revisión de literatura especializada y repasando aspectos principales de la medida, Baliña va a concluir que el IFE fue un refuerzo de esquemas de protección social preexistentes, invitándonos a pensar si no es conveniente readecuar estos diseños por fuera de los esquemas clásicos del trabajo como ancla de la seguridad social. Su aporte es doblemente desafiante a quienes nos interesa el estudio de las políticas públicas en momentos donde la relación capital-trabajo, en sentido clásico, parece estar en crisis, al visibilizarse tareas sensibles a la reproducción del capital sin estar lo suficientemente remuneradas o valorizadas.

A propósito de la seguridad social y de la calidad de las intervenciones, Diego García revisa la evolución de la ANSES desde su creación hasta nuestros días. Se trata de una muy lograda caracterización desde los orígenes de un organismo con gran protagonismo en muchas de las políticas públicas de los últimos años. El autor se apoya en literaturas de gestión pública y sitúa su marco teórico con aportes de autores muy consultados en nuestra carrera, como Carlos Matus, Oszlak y O’Donnell o Michel Lowi. Es un artículo que nos permite combinar teoría de la mano de un caso bien práctico en una recorrida por sus diferentes etapas, lo que dice mucho, además, de los énfasis que cada gestión le ha dado a la seguridad social en las últimas décadas y de las cosmovisiones sobre el Estado que fueron prevaleciendo en cada etapa.

“El Programa Potenciar Trabajo en Argentina (2020-2023). Dimensiones y reconfiguraciones de la política pública más controversial del último tiempo” es, ya desde el título, un artículo que invita a la lectura. Valentina Ledda nos desafía: ¿se cumplieron los propósitos que tuvo esa iniciativa en su

concepción? ¿Cuánto nos dice este caso sobre las divergencias que muchas veces se verifican entre intenciones y acciones? Más aún, Ledda parece promover una desmitificación en las acciones estatales y ayudarnos a entender que no siempre la intervención del Estado es buena en sí y, muchos menos, puede estar dissociada del conjunto de políticas con las que interactúa y dan sentido. Si bien podría ser un caso más de una política que queda desnaturalizada en sus objetivos originales, la autora se ocupa de enfatizar que tampoco logró ser ancla de asistencia a sectores expuestos a desigualdades múltiples, toda vez que de su reconfiguración posterior se pareció penalizar la falta de registro de sus beneficiarios —expulsando a más de 100.000 titulares— cuando en verdad quizás debió acudir a su búsqueda para evitar dejar sin asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. Volviendo al interrogante anterior, ¿podríamos pensar en que sin los compromisos de ajuste del gasto público asumidos con el FMI en estos años esta reconfiguración no se hubiese implementado? ¿Cuánto condicionó esa nueva coyuntura los objetivos fundacionales de la política? Nuevamente, Ledda parece proponernos pensar políticas en contexto y desde un conjunto de políticas para estimar impactos y readecuaciones.

Siguiendo con la temática de las desigualdades, no caben dudas que hoy las mismas tienen género y edad: son las mujeres y las niñas las que probablemente más las padecen. Invisibilizadas desde el Estado, no había habido hasta ahora políticas públicas de gran alcance que pudieran dar cabal respuesta a esta situación, y podemos acordar —como “marca de época”— que las largas demandas de los feminismos tuvieron ciertas cristalizaciones, en recorridos nunca suficientes ni agotados. En ese sentido, un equipo coordinado por la docente de nuestra carrera, Roxana Mazzola, proyecta y presenta una de las iniciativas más interesantes que se han desplegado en estos años en Argentina, la llamada “Infraestructura del Cuidado”, con ancla en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Es un caso interesante porque aporta lo que representa todo el ciclo de la política, desde la caracterización del problema hasta su ejecución. Y destaca la necesidad de construir datos y registrar evidencia para un mejor foco de las intervenciones.

En esa línea también, hay que leer el artículo de Juan José Carbajales: El “Plan Gas.Ar”. Son reiteradas las declaraciones de los “hacedores de política” respecto a la fecundidad de nuestros recursos naturales y de cómo Vaca Muerta puede contribuir a resolver muchos de los problemas macroeconómicos que tenemos hoy. Carbajales nos convoca a leer sobre una de las iniciativas más trascendentes en política energética de estos años, que puede incidir en la restricción externa, colaborar en el definitivo autoabastecimiento y hasta generar excedentes de exportación por muchos años. No hay que ser experto para dimensionar la importancia que la energía tiene para la competitividad de la industria y especialmente el gas para la transición hacia energías limpias, pero lo interesante de la contribución de Carbajales es que expresa lo complejo de implementar una política que demanda coordinación horizontal —entre diferentes organismos y empresas del Estado—, coordinación vertical —en la construcción de consensos sociales para la implementación de estas iniciativas en los territorios— y acuerdos políticos que colaboren en la sostenibilidad de estas medidas en el marco de un país federal, donde no siempre los intereses de los distintos actores estatales son convergentes. Frente a un sector privado oligopolizado e intensivo en capital, lograr márgenes de “autonomía enraizada” por parte de los *policy makers*

luce prioritario y es un renovado desafío que se le impone al Estado frente a intentos por impugnar su centralidad en las decisiones.

Cuando hablamos de recursos naturales, la tensión entre ambiente y desarrollo es uno de los clivajes prioritarios a discutir y analizar. Sectores productivos emergentes y dinámicos, como la explotación del litio en el norte de nuestro país, genera múltiples contrapuntos por la posibilidad de extender la frontera productiva en zonas históricamente postergadas o de menor desarrollo relativo. Eso, sin dudas, impacta en las comunidades y destaca un debate necesario sobre qué tipo de desarrollo estamos dispuestos a asumir y qué índices de exclusión social son tolerables en economías más integradas e interdependientes. María Micaela Oroz se sitúa en estas discusiones y abre una ventana para analizar, desde la explotación del litio, las oportunidades y desafíos que se nos presentan en un país dotado de recursos naturales diversos y en muchos casos subexplotados.

Creemos, así, que este número de *Punto Seguido* reúne aportes variados con el siempre prioritario objetivo de estimular el debate y la reflexión crítica sobre temas centrales para el desarrollo de nuestro país, que tanto nos ocupan e interesa estudiar.